

PROPUESTA DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA TARIFA ELÉCTRICA PARA 2006

COMENTARIOS DE GREENPEACE

19 de diciembre de 2005

Greenpeace considera que la tarifa eléctrica sigue siendo absolutamente artificial, no refleja los costes reales y deja a los consumidores sin posibilidad de elegir a quién comprar su electricidad. Además, el Ministerio obliga a los consumidores a pagar el coste de las emisiones de CO₂ de las centrales térmicas, en vez de ser las compañías eléctricas quienes carguen con ello.

1. Una tarifa artificial

Greenpeace considera que el verdadero precio de la energía está siendo ocultado a los consumidores por dos caminos:

- Por un lado, se permite que las grandes compañías eléctricas fijen libremente, pero de forma oscura, el precio en el mercado de generación, lo que a juzgar por los altos precios que se han alcanzado este año debe suponer grandes ganancias para estas compañías.
- Por otro lado, el Ministerio, al fijar la tarifa que pagarán los consumidores, realiza un cálculo arbitrario que no cubre los costes totales del servicio, resultando una tarifa artificialmente barata.

El resultado es que la electricidad cuesta menos comprándola a tarifa de lo que costó a las empresas distribuidoras y comercializadoras comprarla en el mercado de generación. En estas condiciones, sólo las grandes compañías eléctricas verticalmente integradas pueden sobrevivir, pues sólo ellas se pueden permitir vender la electricidad barata habiéndola comprado cara, porque son ellas mismas las que la produjeron y la vendieron cara en el mercado de generación ("pool"). En consecuencia, no existe un mercado al alcance de los consumidores, que se quedan sin posibilidades de elegir.

A pesar de que este año se introducen medidas positivas, como un primer paso hacia tarifas escalonadas por niveles de consumo y una mayor cantidad para programas de eficiencia energética, todo ello con el fin de contribuir a una mejor gestión de la demanda, el mensaje global sigue siendo muy negativo, pues se disfraza el precio de la electricidad para que parezca más barata de lo que realmente cuesta, con lo que se sigue incentivando el derroche energético.

Propuestas de Greenpeace

Para evitar este problema, Greenpeace exige que, si han de existir tarifas, éstas se establezcan de forma que los precios reflejen los verdaderos costes de la electricidad, incluyendo los costes ambientales mediante impuestos específicos y distinguiendo el origen de la electricidad.

Además, para evitar abusos de posición dominante que conduzcan a precios abusivos, se debe de obligar a una separación jurídica de las distintas actividades eléctricas: generación, transporte, distribución y comercialización.

Para acabar con el derroche, la electricidad tiene que ser más cara, pero eso no significa que las eléctricas tengan que ganar más. Los costes de la energía que no se ven en el precio, los estamos pagando con nuestros impuestos. Al final pagamos lo mismo los que consumimos que los que no. Es urgente una reforma que introduzca transparencia y racionalidad, pues ahora los consumidores son cautivos indefensos de las eléctricas.

2. Tratamiento de los derechos de emisión

Otro artificio de la actual tarifa es la inclusión de un supuesto déficit de derechos de emisión de CO₂, por valor de 130 millones de euros. Una empresa que genere en una central térmica y emita más cantidad de la que tiene asignada tiene dos opciones: reducir sus emisiones o pagar por emitir más, comprando derechos de emisión. El derecho de emisión es un coste real, pero sólo para aquella empresa que decida no reducir sus emisiones (generando con una fuente de energía más limpia, por ejemplo).

Permitir que el precio de los derechos de emisión forme parte de la tarifa supone anular el incentivo que implica el mercado de derechos de emisión para reducir las emisiones. Con ello se obliga a los consumidores a pagar por una energía sucia que no han podido elegir. La tarifa actual nos obliga a todos a comprar energía sucia, queramos o no.

Propuestas de Greenpeace

Puesto que las empresas pueden elegir no pagar derechos de emisión (contaminando menos), también los consumidores deben tener derecho a elegir electricidad limpia y no se les debería obligar a pagar por el CO₂.

Greenpeace considera que los derechos de emisión deberían ser tratados como un coste empresarial que no debería repercutirse a los consumidores a tarifa.